

REPUBLICA ARGENTINA

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta Nº 420

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

41ª REUNION — CONTINUACION DE LA 13ª SESION ORDINARIA
DICIEMBRE 4 DE 1997

Presidencia de los señores diputados Marcelo López Arias y José Gabriel Dumón

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALOVICH, Eduardo Antonio
ABÁN, Gloria del Socorro
ABASTO, Ángel Leónidas
ACEVEDO, Sergio Edgardo
ADAINIE, Felipe Teófilo
AGUIRRE, Orlando Raúl
ALARCIA, Martha Carmen
ALESSANDRO, Dario Pedro
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTERACH, Miguel Ángel
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl Ángel
ALVAREZ GARCÍA, Normando Miguel
ALLENDE, Alfredo Estanislao
ARAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes M.
ARIAS, César
ATANASOF, Alfredo Néstor
AVILA, Eduardo Carlos
AYALA, Juan Carlos
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BANZAS de MOREAU, María del C.
BARBERIS, Edgardo Ángel
BARRIONUEVO, Eduardo Ernesto
BARRIOS, Luis Américo
BARRIOS ARRECHEA, Ricardo Alfredo
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZI, María Cristina de los Ángeles
BIANCULLI, Leticia
BIZZOTTO, Ileana
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORDENAVE, Marcela Antonia
BRAVO, Alfredo Pedro
BRITOS, Oraldo Norvel
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BULACIO, Rafael Alberto
CABALLERO MARTÍN, Carlos Aurelio
CAFFERATA NÓRES, José Ignacio

CATIERO, Juan Pablo
CALLABA, Anibal
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMARA, Mario Miguel
CAMBARERI, Fortunato Rafael
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARBAJAL, Arnoldo Dante
CARCA, Elisa Beatriz
CARDOSO, Marta Elena
CARRARA, Emilio Eduardo
CARRÍO, Elisa María Avelina
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Alicia Amalia
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José Manuel
CRUCHAGA, Melchor René
CHICA, Juan José
DAS NEVES, Mario
DELLA, Roberto Antonio
DEL CASTILLO, Fernando R.
DEL FABRO, Lilibian del Carmen
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ LOZANO, Julio César
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGÓN, Roberto Secundino
DÓMINA, Esteban Alberto
DOMÍNGUEZ, Dolores Carmen
DOMÍNGUEZ, Lorenzo Sebastián
DOMSIC, Lidia C.
DRAGACEVIC, Carmen Nilda
BRISALDI, María Rita
DUFOU, Pedro Alfredo
DUMÓN, José Gabriel
ESCALANTE ORTIZ, Herminia Elsa
ESTEVEZ BOERO, Guillermo Emilio
ESTRADA, Arnaldo Damián
FADEL, Mario Nallib
FABRISIN, Carlos Alberto
FAYAD, Víctor Manuel Federico
FERNÁNDEZ, Alberto Manuel
FERNÁNDEZ de COMBES, Elsa A.
FIGUEROA, Pedro Octavio

FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge Roque
GALMARINI, Fernando Nicolás
GARAY, Nicolás Alfredo
GARRE, Nilda Cella
GATTI, Héctor Ángel
GAZIA, Rodolfo Mauricio
GIANNI, Gloria María Cristina
GIMÉNEZ, Ramón Francisco
GOLLY, Eduardo Ceferino
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GONZÁLEZ, María América
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio
GORINI, Floreal Edmundo
GRANADOS, Dulce
GUDINO, Ermelinda Amalia
GUEVARA, Cristina Rosalía
GUTIÉRREZ, Diana Bárbara
GUTIÉRREZ, Gustavo Eduardo
GUZMÁN, María Cristina
HAQUIM, Carlos Guillermo
HERRERA, Alberto
HERRERA ARIAS, Manuel Hipólito
ILLIA, Martín Arturo
IRRABAL, Lilibian María del Carmen
ISEQUILLA, Amalia
JAUNARENA, José Horacio
JOGA, Vicente Bienvenido
KAHLER, Enrique Rolando
LAFFERRIERE, Ricardo Emilio
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LENCE, Héctor
LIPONEZKY de AMAVET, Sara G.
LÓPEZ, Elsa Isabel
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LLOPIS, Enrique Raúl
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAQUEDA, Juan Carlos

MARTÍNEZ, Esteban
 MARTÍNEZ, Manuel Luis
 MARTÍNEZ, Silvia Virginia
 MARTÍNEZ GARBINO, Emilio Raúl
 MARTÍNEZ ZUCCARDI, Manuel A.
 MATHOV, Enrique José
 MAURETTE, Fernando Wenceslao
 MELOGNO, Elsa
 MENEM, Carlos Omar
 MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
 MIGLIOZZI, Julio Alberto
 MIRALLES de ROMERO, Norma A.
 MONDELO, Lidia Elizabeth
 MONDINO, Eduardo René
 MONTIEL, Sergio Alberto
 MOTHE, Félix Arturo
 MUSA, Laura Cristina
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 OBARRO, Luis Manuel
 OCAMPOS, Jorge Armando
 OLIMA, Juan Carlos
 PANDO, Ana María
 PARAJÓN, José María
 PARENTELLA, Irma Fidela
 PARRA, Nélida del Carmen
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PASQUALINI de ACOSTA, Elida E.
 PASSO, Juan Carlos
 PATTERSON, Ricardo Ancell
 PELÁEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PEREYRA de MONTENEGRO, María G.
 PEREZ, Jorge Telmo
 FERNASETTI, Horacio Francisco
 FERRINI, Gioconda Eulalia
 PEZOA, Juan Carlos
 PICCHETTO, Miguel Ángel
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PIÑÓN AVILA, Celia Isabel
 PIRIZ, Juan Carlos
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRUYAS, Tomás Rubén
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 RAMPI, Pascual Ángel

REMEDÍ, Luz E.
 RIVADERA, Marta Liliana
 ROBERTI, Raquel Griselda
 ROBLES, Miguel Ángel
 RODIL, Rodolfo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROJO, Rubén Darío
 ROLLANO, Eduardo Daniel
 ROY, Irma
 RUBEO, Luis
 RUBINI, Mirta Elsa
 SAGGESE, Néstor Mario
 SALIM, Fernando Omar
 SALTO, Julio Francisco José
 SAMPIETRO, Darci
 SANCHEZ, Mary
 SANTA MARÍA, José F.
 SANTANDER, Mario Armando
 SARQUIZ, José Alberto
 SCHIMIZZI, Gloria Elida
 SCHIARETTI, Juan
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando Exequiel
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPERATTI, Alfredo Ramiro
 STORANI, Federico Teobaldo Manuel
 STUBBIN, Marcelo Juan Alberto
 STÁREZ, Juan Carlos
 TAGLIAFICO, José A.
 TENEV, Carlos
 TEODOSIU, Jorge Nicolás
 TOGNI de VELY, Adriana Leonor
 TOLOMEO, Leonor Ester
 TOMA, Miguel Ángel
 THETTEL MEYER, Raúl
 TULLIO, Rosa Ester
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VAZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENSSENTINI, Marcelo Eduardo
 VERAMENDI, Juan Carlos
 VIANA, Mariano Roberto
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 VILCHE, Carlos Alberto
 VILLALBA, Alfredo Horacio
 VIQUEIRA, Horacio Gustavo
 VITAR, José Alberto
 ZUCCARDI, Cristina

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:

ALVAREZ, Carlos Alberto
 AVETZ, Liliana
 GODOY, Norma
 GONÍ, María Virginia
 MERCADEER, Martha Evelina
 MÜLLER, Mabel Hilda

AUSENTES, CON LICENCIA:

KESSLER, Ana Raquel
 LEGUIZAMÓN, María Laura

AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE
DE APROBACION
DE LA HONORABLE CAMARA:

ARAMBURU, Guillermo Raúl
 BORDA, Osvaldo
 JUNCOSA, Rodolfo Aldo
 MATZKIN, Jorge Rubén
 VICCHI, Raúl Horacio
 ZAVALIA, José Luis

AUSENTES, CON AVISO:

BORDÍN, Hugo Antonio
 BRAVO, Leopoldo Alfredo
 BRESER, Adalberto Edgardo
 BULLRICH, Patricia
 CAERÓN, Juan Carlos
 CAILLET, Carmen del Rosario
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CEBALLOS DE MARIN, Fani Azucena
 GABRIELLI, Rodolfo Federico
 GOLPE, Carlos Horacio
 MORELLO, Emilio Pedro
 MOSSELLO de BENZO, María del C.
 MURIEL, Néstor Jorge
 RUIZ PALACIOS, José David A.
 SALINO, María Antonia
 SEBASTIANI, Claudio Augusto
 SORIA, Edmundo del Valle

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondientes a la Sesión Preparatoria (43ª reunión, período 1995), de fecha 29 de noviembre de 1995.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda por el que se modifica el proyecto de ley en revisión sobre régimen orgánico del Ministerio Público (160-S-96). Se aprueba en general. (Pág. 4921.)
2. Moción de orden formulada por el señor diputado Camaño de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 4930.)
3. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se acuerda autorización al señor presidente

de la Nación para ausentarse del país durante 1998. Se sanciona definitivamente (ley 24.915). (Página 4931.)

4. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4931.)
5. Moción de orden formulada por la señora diputada Zuccardi de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de solicitar el tratamiento del proyecto de ley de su autoría sobre régimen para el fomento de la lucha antigranizo (260-D-97). Es retirada. (Pág. 4940.)
6. Consideración del dictamen que contiene el informe final de la Comisión Especial Investigadora Contrataciones Estado Argentino-IBM (5.756-D-97). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 4940.)

7. Apéndice:

- A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 5054.)
 B. Inserciones solicitadas por los señores diputados:

1. Garré. (Pág. 5072.)
2. Cafferata Nores. (Pág. 5073.)

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 1997, a la hora 18 y 43:

1

REGIMEN ORGANICO DEL MINISTERIO PUBLICO

(Continuación)

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión sobre régimen orgánico del Ministerio Público (expediente 160-S-96).¹

Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Garré. — Señor presidente: sin ninguna duda, y como ayer se dijo en este recinto, estamos tratando un tema fundamental que nos permite brindar alguna solución a la grave crisis institucional que vive la Argentina, y comenzar a construir la confianza que la sociedad quiere depositar en este Poder Legislativo.

Creo que el 26 de octubre quedó claro que, así como la gente pidió más salud, más trabajo, más educación y más justicia para vastos sectores de la sociedad, también pidió menos corrupción y mayor calidad en el funcionamiento de las instituciones.

La gente pidió de alguna manera un Poder Legislativo que fuese capaz de generar los remedios legales a las situaciones que todos diagnosticamos, pero que lamentablemente a veces no logramos solucionar. El pueblo pidió un Poder Ejecutivo menos afecto a los decretos de necesidad y urgencia y menos deseoso del uso indiscriminado de la facultad constitucional del veto; pidió, sobre todo en el orden institucional, una Justicia más independiente y más imparcial, una Justicia que realmente garantice la tutela de los derechos de los ciudadanos.

Todo esto se produce porque la gente a diario visualiza una Justicia que evidentemente

funciona mal; además, porque al recuperarse la democracia en 1983 la gente tuvo en ese momento una gran demanda de justicia y, por lo tanto, depositó mucha confianza en el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque en esos tiempos tuvieron lugar los juicios a las juntas militares, al general Camps, e incluso al propio Monzón —por supuesto, sin poner en un plano de igualdad los dos primeros con el tercero—, que fueron muy comunicados por la prensa, muy públicos, y sus resultados de algún modo gratificaron a la sociedad en su necesidad de justicia. Ello hizo caer a la gente en el equívoco de que ese Poder Judicial podía ser eficiente a pesar de que tenía recursos materiales y humanos escasos, procedimientos lentos e incluso obsoletos pues ni siquiera estaba informatizado.

Esa crisis de recursos generó de alguna manera la lentitud de la Justicia, y todos sabemos que la justicia lenta no es justicia, aunque a veces puede ser peor pues la justicia ineficiente en ocasiones provoca impunidad. En ese sentido, pocos días atrás leímos en los diarios el paradójico caso del juez Galeano, quien está abocado a resolver uno de los problemas más graves que el Poder Judicial tiene pendientes de resolución en la Argentina: el megatentado a la sede de la AMIA, y sin embargo sólo cuenta con ocho empleados que deben procesar miles de escuchas telefónicas y manejar un expediente que en la actualidad ya suma trescientos cuerpos.

Esta Justicia garantiza la impunidad. Además, existe una sensación de corrupción en muchos magistrados, de que desde algún poder se protege a los corruptos, de que los nombramientos y traslados se manipularon políticamente y de que el aumento del número de jueces de la Corte Suprema sólo obedeció a razones políticas. Al respecto, los fallos que en los temas fundamentales casi de modo seguro resultaron de cinco a cuatro fueron ratificando esa sensación de un Poder Judicial dependiente, parcial y no siempre idóneo.

El sistema de designación de los jueces entró en crisis; de allí la decisión que se adoptó en la reforma constitucional de 1994 en relación con el Consejo de la Magistratura, que lamentablemente todavía no se pudo concretar aunque por fortuna las novedades de las últimas horas nos hacen alentar esperanzas en el sentido de que la solución esté más cerca.

Resulta evidente que el Ministerio Público estuvo sometido a una crisis semejante o quizás peor a pesar de que la reforma constitucional contempló en el artículo 120 una solución ins-

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 3 de diciembre de 1997. (Pág. 4843.)

titucional para la ubicación y la estructura de este organismo fundamental.

Se podría decir que el Ministerio Público llegó a niveles de degradación y manipulación mayores que los de ciertas áreas del Poder Judicial, como son básicamente los fueros federal y penal. Al respecto se puede mencionar la ley orgánica de la Justicia —la 23.774—, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ricardo Molinas —por entonces fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas—, y los decretos del presidente Menem por los que se nombró a las cabezas del Ministerio Público y se manipuló al conjunto de fiscales, manejando sus traslados e impartiendo instrucciones como si fueran meros apéndices del poder administrador, lo que en su conjunto condujo a esta institución a su crisis actual. Pero quizás el caso más paradigmático, el ejemplo más grotesco de la descomposición del Ministerio Público, lo ha dado el ex procurador Agüero Iturbe. Agüero Iturbe en este intento de manipular, acotar y manejar a esta institución no sólo redujo el presupuesto, los gastos de funcionamiento y movilidad a los fiscales existentes, sino que además contrató —no lo hizo por ahorrar— numerosos y por supuesto dóciles abogados provenientes casualmente de las provincias de La Rioja —de la que proviene el ex procurador— y Catamarca.

Por otra instrucción 76/94 derogó de hecho el artículo 196 del nuevo Código Procesal Penal que facilitaba a los fiscales iniciar investigaciones de oficio sin denuncias previas.

Por una instrucción, la 1/95, redistribuyó a los treinta y nueve fiscales de primera instancia en el fuero de Instrucción.

Por la instrucción 9/95 obligó a los fiscales a dar noticia a la Procuración sobre cualquier causa de trascendencia o gravedad que iniciaran.

Por la instrucción 27/95 ordenó a los fiscales mesura en las manifestaciones a la prensa, que no se formularan declaraciones antes de dictaminar y que se abstuvieran de difundir —y esta es la clave quizás de este pedido de prudencia y mesura— los pedidos de procesamiento hasta tanto los jueces no los concedan.

Pero quizás como ejemplo máximo de hasta dónde llegó el procurador Agüero Iturbe deberíamos citar el polémico dictamen del titular del Ministerio Público que contradujo un informe de una comisión de fiscales, descartando la existencia de irregularidades y desechando la existencia de hipótesis delictivas en relación con los hechos denunciados por el ex ministro Ca-

vallo respecto del accionar mafioso que éste adjudicaba al empresario Alfredo Yabrán.

Creo que vale la pena recordar lo que dijo la comisión de fiscales. Decía la comisión de fiscales: "A lo largo de la labor desarrollada se ha podido corroborar el cuadro fáctico descrito por el Ministerio de Economía. Se ha verificado la existencia de numerosos atentados con explosivos y actos de intimidación, amenazas de muerte anónimas, privaciones de la libertad, robos, daños, coacciones y lesiones gravísimas. Los atentados denunciados tienen el común denominador de afectar a personas particulares, funcionarios públicos o empresas vinculadas al sector postal.

"Varios de estos delitos coincidieron con la obtención de nuevos sectores de mercado por parte de los afectados."

Sugestivamente, el procurador Agüero Iturbe, en forma contraria a la comisión de numerosos fiscales que firmaban el dictamen anterior, dijo sobre estos mismos hechos: "En el marco de la investigación desarrollada no se han logrado reunir elementos de juicio que permitan sostener la hipótesis formulada por el señor ministro. Los hechos referidos parecen obedecer a motivaciones diversas de las que les fueron adjudicadas."

Casualmente, a través de investigaciones realizadas por los medios de prensa, se conoció después que el propio Agüero Iturbe había sido apoderado en La Rioja de Sky Cab Sociedad Anónima, una de las empresas de correo que se vincularon siempre a Alfredo Yabrán.

Este señor fue el jefe de la Procuración General y el que llevó a la máxima degradación —creo yo— al Ministerio Público.

Esta situación tenía además antecedentes propios de la institución. Lamentablemente, el Ministerio Público siempre estuvo sometido en nuestro país a una anarquía legislativa. Quiroga Lavie lo llama "la Cenicienta institucional". Sus funciones, sus competencias, sus características estaban reguladas en varias leyes. Nunca tuvo una ley orgánica que precisara sus competencias y definiera su organización.

A esta falta de regulación se sumaba además la discusión doctrinaria sobre la ubicación en la que había que poner al Ministerio Público. Por supuesto, a partir de la ley 23.774 y de la legislación vigente desde 1989 se insertó, como decíamos antes, en el Poder Ejecutivo nacional siguiendo básicamente el esquema estadounidense.

Esto también estaba sostenido, de alguna manera, en la doctrina de autores como Joaquín V.

González, Bielsa o Jofré, quienes consideraban al Ministerio Público más que como un ministerio fiscal que defiende los intereses del Estado; como uno de carácter público que defiende los intereses de la sociedad.

Ultimamente esto ha sido muy cuestionado en la Argentina por la doctrina. Me refiero a la posibilidad de que estuviera inserto en el Poder Legislativo o vinculado con él con algún grado de dependencia. Esta experiencia registrada en algunos países comunistas no tenía arraigo doctrinario ni práctico en las Constituciones provinciales de nuestro país.

La tesis de que estuviera en el Poder Judicial, atento a que los fiscales y defensores actuaban ante los jueces como requirientes y que esa pertenencia podía ser una garantía de su gestión imparcial, tenía bastante arraigo. No sólo la sostenía la doctrina de Julio Maier y Claría Olmedo, sino también la mayoría de las Constituciones provinciales de la Argentina.

La cuarta posibilidad, que finalmente ha adoptado el artículo 120 de la Constitución Nacional, es la del organismo extrapoder o minipoder, como lo llaman algunos, con competencias específicas pero ajeno a los tres poderes clásicos. Algunos se preguntarán por qué. Creo que esto está vinculado con la competencia que se asigna al Ministerio Público.

Cuando Montesquieu escribe sobre los tres poderes se refiere a los tres poderes del Estado. Si creemos que el Ministerio Público representa básicamente a los intereses de la sociedad y los derechos de los ciudadanos antes que a los del propio Estado, lo que más garantizaría la posibilidad de controlar a los jueces y a los tres poderes es precisamente que estuviera fuera de la estructura del Estado. Además, para defender a la sociedad, si ésa es la competencia, no hay que descartar la posibilidad de que muchas veces actúe en oposición a actos u omisiones del Poder Judicial. En ese sentido lo más adecuado es que también pueda actuar desde afuera.

De todas maneras, la ley 24.309, en su artículo 3º, que declaró la necesidad de la reforma constitucional, había salvado este tema al señalar la ubicación de esta institución como órgano extrapoder. Los constituyentes de 1994 también aceptaron esta posibilidad en forma muy clara: por medio de un artículo específico, nuevo, que está contenido en la sección IV, dentro de la segunda parte del título I, dedicada al gobierno federal. No está incorporado a ninguno de los tres poderes y la norma está fuera de ellos.

Por si esto no fuera suficiente, quizás corresponda agregar, siguiendo una estadística publicada en un artículo del doctor Cavagna Martí-

nez, que el 82 por ciento de los proyectos presentados en la Convención Constituyente le adjudicaban esta naturaleza de organismo extrapoder, y que sólo un 18 por ciento de los proyectos lo ubicaban en el Poder Judicial.

Además del dictamen firmado y votado por amplia mayoría en la Convención Constituyente, queremos citar lo que expresó el miembro informante del proyecto, doctor Masnatta, en el sentido de que es necesario desvincular al Ministerio Público de los poderes Ejecutivo y Judicial a fin de terminar con la servidumbre que padeció desde tiempo atrás. Luego de exponer sobre las variantes habituales en la doctrina, descartó al Poder Ejecutivo y al Judicial inclinandose por la concepción del órgano extrapoder.

Por ello, tanto la afirmación del doctor Masnatta como el dictamen producido en la Convención Constituyente y la ley precedente, no dejan dudas acerca de cuál es el objetivo que hay que garantizar: que el Ministerio Público actúe en coordinación con los demás autoridades de la República tal como lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional. Ello significa que estamos ante un sujeto que actúa en coordinación con los otros poderes del Estado.

En la Convención Constituyente los doctores Jorge de la Rúa y Aníbal Ibarra, representantes de la Unión Cívica Radical y el Frepaso respectivamente, insistieron en la tesis de afianzar la independencia del Poder Judicial; inclusive, el doctor Ibarra solicitó que fuera la Constitución la que regulara detalladamente esta figura a fin de que no quedara librada a nuestra responsabilidad —la del Poder Legislativo—, como ocurre con determinados temas que no han sido debidamente precisados en la Constitución Nacional, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que ha originado largos debates y aún no se ha llegado a su sanción.

La teoría del organismo extrapoder no está del todo concluida en el ámbito del derecho constitucional. Algunos autores, por ejemplo el doctor Dromi, al comentar la Constitución de 1934 dice que no podemos hablar de extrapoder porque la Constitución Nacional no lo ha llamado expresamente de esa manera. Sin embargo, el doctor Bianchi señala que es un cuarto poder, porque la Constitución Nacional lo sanciona de manera distinta a la de los otros tres poderes.

Sin pretender entrar en discusiones doctrinarias, considero que queda claro que lo que se persiguió fue afianzar la independencia de esta institución para que pudiera cumplir con sus finalidades, que, según la Constitución, son las de afianzar la legalidad —la constitucional por sobre todas las cosas— y los intereses generales

de la sociedad. El Ministerio Público representa al poder social, como lo llama Quiroga Lavie.

El afianzamiento de la legalidad nos aleja de la función persecutoria típica que a veces vemos en los procesos penales que se desarrollan en algunas películas, en las que aparece un fiscal verdugo que se convierte en el mejor fiscal cuando logra más condenas y no cuando permite dictar sentencias justas que de alguna manera contribuyan a fortalecer el proceso.

Hablando de una de las finalidades de esta institución, el doctor Masnatta hacía referencia a la protección de los intereses generales de la sociedad, la custodia de la ética pública y la eliminación de las manifestaciones delictivas que ponen en tela de juicio la credibilidad del sistema democrático. Esas son las misiones que el Ministerio Público debe cumplir en representación de la sociedad argentina.

Un tercer tema muy discutido en la doctrina y que también había dado lugar a verdaderas tergiversaciones acerca de la naturaleza del Ministerio Público es el de su estructura, es decir, si era o no bicéfalo. En esto también la Constitución se definió por un órgano bicéfalo porque, como dice Masnatta: "El jefe de los fiscales no debe ser el jefe de los defensores o miembros del Ministerio Público popular. Termina así la situación de esquizofrenia que se presenta cuando la máxima autoridad de los acusadores también debía dirigir a los defensores públicos de los acusados."

Por supuesto que esta existencia de dos cabezas en el Ministerio Público debe ser garantizada con una coexistencia útil y armónica.

Es evidente que la Constitución resolvió en gran medida los problemas que tenía el Ministerio Público como institución en la Argentina. También es evidente que con este proyecto de ley venido en revisión, al que le hemos introducido correcciones para mejorarlo, estamos construyendo los cimientos y poniendo los ladrillos para una estructura democrática e independiente.

Estamos dando un primer paso. Somos conscientes de que hay que ir cambiando esta estructura, de que hay que llenarla de contenido, de que —como diría el poeta— hay que hacer camino al andar. También estamos seguros de que algunos de sus puntos quizás no sean los mejores para garantizar estos principios constitucionales.

Hemos consensuado el proyecto. Sabemos de los enormes esfuerzos que se han hecho en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para acercar posiciones. No ignoramos el esfuerzo del señor diputado Soria con el fin

de arribar a acuerdos, ni el trabajo desinteresado que ha hecho cada una de las bancadas para llegar a esta institución que es una necesidad en la Argentina.

Me reservo el derecho de hacer algunos comentarios en la consideración en particular, aunque no tengo mucha ilusión de que el señor diputado Soria los admita. Si bien he firmado el dictamen sin disidencias —porque creo que por lo menos hay que empezar por esta ley—, mi bloque sigue pensando que deberíamos haber adoptado el sistema de concursos en una forma más detallada, tal como esta Cámara lo consensuó respecto del Consejo de la Magistratura. Además, para garantizar esta característica de órgano extrapoder el Poder Ejecutivo no debería elegir un miembro de la terna para derivarlo al Senado a fin de que preste su acuerdo, sino que el procurador general y el defensor general —las cabezas del Ministerio Público— tendrían que ser los que reciban esa terna para su derivación al Senado. El proyecto que presentó la Alianza mantenía esta posición.

Hacemos una última invocación a fin de que se acepten nuestras propuestas. De todos modos, considero que al sancionarse este proyecto estaremos contribuyendo con una ley más a esta solución que el 26 de octubre la sociedad nos reclamó enérgicamente.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Olima. — Señor presidente: como ningún integrante del bloque PAIS forma parte de esta comisión, queremos participar en el debate con una breve intervención.

Los argentinos estamos recorriendo un camino de real importancia con la sanción de este proyecto de ley. No sólo estamos dando cumplimiento al mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional reformada en 1994, sino que además estamos poniendo punto final a una vieja situación que, indudablemente, ha contribuido a que se haya instalado en la opinión pública la sensación de falta de transparencia en la administración de justicia.

La creación de un Ministerio Público Fiscal, con autarquía de funcionamiento en lo económico y en lo administrativo, está revelando que la sociedad argentina ha alcanzado un nivel de madurez sobre el que a veces ni los propios legisladores tenemos conciencia.

Escuchaba a la señora diputada Garré referirse al mandato del 26 de octubre. Junto a ello celebro que este proyecto sea, en realidad, el esfuerzo de un conjunto de legisladores que interpretaron esa voluntad mucho antes del 26 de octubre.

Más allá de su ubicación autónoma, nadie puede dudar de que la acción de los fiscales públicos es una parte esencial de la administración de justicia. Por eso queremos felicitar calurosamente a todos los miembros de las comisiones que han elaborado este dictamen, que por supuesto es perfectible y tiene elementos mejorables pero que, indudablemente, da un salto cualitativo enorme en la administración de justicia en la Argentina.

Me queda francamente una duda muy profunda con respecto a la disposición contenida en el artículo 72, en la cual se garantiza la estabilidad de todos aquellos funcionarios que venían cumpliendo el rol de fiscales en diferentes niveles.

El actual cuerpo de fiscales ha sido heredado y tiene una antigüedad de 20 a 25 años. Si se observa lo que ha ocurrido en el país en ese lapso, no estoy convencido de que sea una buena política el mantenimiento de las viejas designaciones.

Los argentinos estamos viviendo una mala experiencia con la Policía de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra que, cuando las cuestiones no se encaran a tiempo, quien en definitiva lo hace debe proceder con decisión y audacia para resolver los problemas.

No dudo de que el actual mecanismo de designaciones mejorará la calidad del Ministerio Público Fiscal, pero me pregunto cuánto tiempo demorará la depuración, a la luz de la estabilidad que se otorga al cuerpo actual de fiscales en todos sus niveles.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor José Gabriel Dumón.

Sr. Olima. — Todos conocemos las formas en que se produjeron muchas de esas designaciones; a veces, el origen se sitúa en la época del proceso, cuando precisamente no imperaba el Estado de derecho en la Argentina. También sabemos de algunas carreras meteóricas en función de necesidades políticas circunstanciales.

Francamente, me parece que no hacemos un favor a la consolidación de la Justicia al dejar esta situación sin ninguna modificación. Creo que sería posible encontrar mecanismos que, contemplando la lógica preservación de aquellos que hayan cumplido con sus funciones, consideren también la situación de quienes deben ser sometidos a algún tipo de análisis o ratificación. No es la primera vez que esto sucede en el país, en el Estado de derecho, cuando se ha intentado modificar a fondo las instituciones, como estamos tratando de hacer con el Ministerio

Público Fiscal mediante el proyecto de ley en tratamiento, que ha sido fruto de un esfuerzo consensuado.

Nuevamente, felicito a todos los integrantes de las comisiones que intervinieron en la redacción de este proyecto de ley, pero dejo mi reflexión acerca de la peligrosidad de mantener las actuales estructuras del actual Ministerio Público Fiscal.

Sr. Presidente (Dumón). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: decían ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señor diputado Carlos Soria, y la señora diputada Carrió que estábamos ante un hecho trascendente que tiende no sólo a fortalecer la democracia y la independencia del Poder Judicial, sino que al mismo tiempo contribuirá a la cultura jurídica y política de los argentinos. Se trata de esta nueva estructura que estamos forjando, denominada "Ministerio Público".

En el mismo orden de ideas, me animo a decir que nos hallamos frente a la mayor construcción institucional que hizo la reforma constitucional de 1994; los constituyentes crearon un órgano extrapoder y hoy los legisladores estamos modelando una nueva institución de la Nación.

Desde el punto de vista de la construcción del poder, éste es el instituto más importante que ha introducido la reforma constitucional; pero es inevitable efectuar un repaso acerca de por qué se llegó a esta situación en la citada Convención Constituyente. ¿Cuál era la situación del Ministerio Público antes de la reforma constitucional de 1994, por la que se incorporó a la Constitución el artículo 120, tan pequeño, tan conciso pero con las mayores posibilidades de desarrollar una nueva institución para la Nación?

Jorge Reinaldo Vanossi, en un excelente trabajo de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales denominado *El Ministerio Público* —de reciente aparición—, señala que lo acontecido en los cien años previos a la última reforma constitucional lo llevan a cuatro conclusiones respecto del Ministerio Público: desorden, confusión, ambigüedad y dualidad.

Desorden, por el caos y la dispersión legislativa; confusión, por la ubicación institucional del Ministerio Público que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se disputaban, y que terminaba representando más a los intereses del Estado que a los de la sociedad, con una sumisión directa al Poder Ejecutivo; ambigüedad, porque la propia Corte Suprema en algún momento sostuvo en sus fallos la estabilidad de los magistrados del Ministerio Público, mientras que

en otras ocasiones la desconoció; y dualidad, reconocida por el decreto 1.285/58, porque una cosa era la situación del fiscal de cámara y otra distinta era la del agente fiscal.

Se pregunta Vanossi sobre el porqué de esta situación de ambigüedad, de dualidad, de confusión, y se contesta que la explicación ha sido siempre la misma y se encuentra de alguna manera en la famosa resolución del año 1903 de Joaquín V. González, cuando era ministro del Interior, porque el Ministerio Público no sólo debe representar el interés de la sociedad *in totum* sino también al que se corporice en el Poder Ejecutivo a través de la defensa patrimonial del Estado.

Otro eximio constitucionalista, el santafesino Rafael Bielsa, dijo que "se confunden frecuentemente no sólo la esencia de la institución del Ministerio Público sino también, y como consecuencia de ello, la naturaleza y el objeto de sus funciones."

Sabemos que en una institución jurídico-política de las características del Ministerio Público si no se tiene en claro su naturaleza jurídica tampoco se pueden tener en claro los objetivos ni las funciones de esa institución.

Para hacer un análisis serio tenemos que dividir la situación del Ministerio Público hasta la reforma constitucional de 1994 y desde esa fecha hasta el presente.

Hasta 1994, el Ministerio Público era un organismo polifacético que tenía una situación híbrida; era un organismo olvidado y maltratado institucionalmente.

Siguiendo un análisis lógico, tenemos que preguntarnos como primera medida sobre el porqué de la ausencia de un precepto constitucional que regle en principio las bases ordinales de lo que podía ser el Ministerio Público. Es decir ¿por qué si ya en el reglamento de administración de justicia de la Asamblea del año 1813 existía el Ministerio Público? ¿Por qué si en las constituciones de 1819 y 1826 se consagraba el Ministerio Público? ¿Por qué si en el anteproyecto de De Angelis, redactado durante la época de Rosas, figuraba el Ministerio Público? ¿Por qué si en el anteproyecto de Alberdi se contemplaba en el artículo 91 la posibilidad de que la Corte Suprema se integrara con nueve jueces y dos fiscales que representaban al Ministerio Público? ¿Por qué si los constituyentes del año 1853 incluyeron —siguiendo la línea de Alberdi—, dos fiscalías que expresaran al Ministerio Público, en la primera reforma constitucional violatoria del precepto que no permitía la reforma de la Constitución durante los diez primeros años —pero que permitió terminar

con la guerra civil de los argentinos a incorporarse a la provincia de Buenos Aires—, los redactores excluyeron la figura del Ministerio Público?

He rastreado en las actas de la Convención de 1860 y en las de la provincia de Buenos Aires de ese mismo año y no hay ninguna explicación seria para esta exclusión, ni en los dichos de Sarmiento ni en los de Vélez Sarsfield, que se ocuparon de este tema.

Todo esto se complementa con otro hecho más grave, con una anarquía normativa que se expresa en la ausencia de una ley orgánica del Ministerio Público, que existe en los países más avanzados del mundo, tales como España desde 1978, en países de América latina como Perú, Venezuela y Brasil, e incluso en la casi totalidad de los países de Europa.

En nuestro país no ha habido en los últimos cien años, ningún instrumento que llevara el nombre de ley orgánica del Ministerio Público. Por eso, cuando queríamos analizar esta institución fundamental advertíamos que existía una profunda dispersión legislativa y que el Ministerio Público se encontraba disgregado en trece leyes: en la ley 27, que organiza la Justicia nacional; en la ley 1.893, que organiza los Tribunales; en la ley 2.372, que organiza la Procuración General; en las leyes 3.367 y 4.055 —esta última que crea las cámaras federales—; en las leyes 4.162, 8.345, 15.464, 17.516, 18.345 —de procedimiento laboral—, 19.539, 20.521 y 23.183. Las he nombrado a todas para que tomemos conciencia de cuál era el nivel de caos y dispersión legislativa en el cual nos veníamos encontrando hasta este momento.

Así llegamos hasta nuestros días y hoy podemos empezar a terminar con esta anarquía legislativa.

Siempre existió incertidumbre sobre la posible legislación. Desde 1984 a la fecha se han presentado en ambas Cámaras del Congreso veintiocho proyectos de ley orgánica del Ministerio Público. Antes de la reforma constitucional fui autor de uno de esos proyectos. Pero básicamente había tres iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo que creaban por lo menos una situación de incertidumbre.

En 1988, gobernando la Unión Cívica Radical y siendo secretario de Justicia mi amigo, el doctor Paixao, éste envió un proyecto de organización del Ministerio Público colocándolo bajo dependencia del Poder Ejecutivo.

En 1993, gobernando el Partido Justicialista y siendo ministro de Justicia el doctor Arslanian,

se envió un proyecto organizando el Ministerio Público pero colocándolo esta vez bajo la dependencia del Poder Judicial. Y en 1994, gobernando el justicialismo y siendo ministro el doctor Barra, se envió al Senado de la Nación un proyecto en el que se consideraba al Ministerio Público un órgano extrapoder, pero que tenía serias limitaciones ya que allí se introducía el discutido tema de las instrucciones generales a los fiscales.

Esta dependencia variada en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y como órgano extrapoder, nos demuestra claramente la incertidumbre que se había generado en torno de la posible legislación, que culmina con esta ley que hoy sancionaremos.

La cuestión más difícil para desentrañar la naturaleza jurídica del instituto que hoy estamos tratando consiste en determinar la inserción o ubicación institucional del Ministerio Público.

Al decir del eminente constitucionalista Néstor Pedro Sagüés, hay cuatro tendencias bien diferenciadas. La primera de ellas es la que hace depender al Ministerio Público del Poder Legislativo. Este caso se dio básicamente en la Unión Soviética, cuya constitución preveía que el titular del Ministerio Fiscal era nombrado y removido por el Soviet Supremo.

Actualmente, también en las Constituciones de Hungría y Bulgaria hay una dependencia del Ministerio Público del Poder Legislativo.

La segunda tendencia, en la que se encuentra inmersa la República Argentina, y que quizá haya sido la más grave por su sustento doctrinario y jurisprudencial, es la que hace depender al Ministerio Público del Poder Ejecutivo.

Revisando nuestra doctrina encontramos eminentes constitucionalistas de la talla de Joaquín V. González o de Rafael Bielsa, y eminentes procesalistas, de la talla de Alsina, de Magnesso o de Jofré, que han sostenido la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 19 de la Honorable Cámara, doctor Marcelo Eduardo López Añas.

Sr. Maqueda.—Esta postura llevó a que en lugar de representar los intereses de la sociedad, tal como hoy prescribe la Constitución Nacional en su artículo 120, el Ministerio Público terminara representando los intereses del Estado. Los representantes del Ministerio Público, al igual que en la Francia del siglo XVI,

eran los representantes del Estado y no los representantes de los intereses supremos de la sociedad. Esta es otra de las anomalías con las cuales termina este proyecto de ley que hoy sancionaremos.

Había otra corriente de nuestra doctrina que ubicaba al Ministerio Público dentro del Poder Judicial. Dicha corriente —muy respetable por cierto— era receptada por todo el derecho público provincial argentino y específicamente por todas las Constituciones de las provincias, a excepción de la de Salta, de la que proviene quien en este momento preside este debate, que lo consideraba como un órgano extrapoder. El resto de las Constituciones ubicaban al Ministerio Público dentro del ámbito del Poder Judicial.

Había eminentes hombres de derecho, de la talla de Gerónimo Cortés, Segovia, Podetti, Barraquero, Chiara Díaz y Bianchi, que sostenían la posición de que el Ministerio Público tenía que estar en el ámbito del Poder Judicial.

Finalmente, la trascendencia de la postura de aquellos que sostenían, como Vanossi, Sagüés o Felipe Seisdedos, que el Ministerio Público tenía que ser un órgano extrapoder, consistía en que se lo desvinculaba del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Se lo independiza de ambos y, por ende, no se halla sometido a la dirección, vigilancia o superintendencia de ningún poder extraño, sino que esas funciones descansan en el órgano interno que preside el cuerpo.

Los tres autores que he mencionado entre los que propugnan esta última solución tienen una idéntica preocupación central: la defensa a ultranza de la independencia del Ministerio Público, que a su vez acentúa la independencia del Poder Judicial.

Para finalizar con el análisis que abarca hasta la reforma constitucional de 1994, corresponde apuntar que existía una jurisprudencia contradictoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que creaba un estado de incertidumbre entre los representantes del Ministerio Público.

El primer caso que hemos computado se denomina "Nación Argentina contra Delena" e involucra el fallo 278-240 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —la de la década del 60, la Corte Risolía—, que sostiene que un fiscal de cámara es magistrado judicial. Sin embargo, *contrario sensu*, hemos registrado el caso Ricardo Caballero —correspondiente a 1991—, sobre destitución de un fiscal de cámara por una resolución ministerial, ni siquiera por un decreto presidencial.

Previo a este último precedente se produjo el fallo 256-546 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —la Corte Imaz— que estableció que no era improcedente que los agentes fiscales fueran cesanteados por resolución ministerial pues carecían de estabilidad en su cargo.

Todo esto fue resuelto por la reforma constitucional de 1994, y en este sentido el Congreso de la Nación ha tenido una influencia decisiva. Afirmo esto porque la Convención Constituyente debía enmarcar su labor en los límites que le imponía la ley de declaración de necesidad de la reforma constitucional. Esa norma fue sancionada por esta Cámara de Diputados en la madrugada del 29 de diciembre de 1993 y dispuso en el inciso g) de su artículo 3º que el Ministerio Público que diseñaran los convencionales constituyentes debía ser un órgano extrapoder.

Por esa razón el artículo 120 de la Constitución Nacional determina que el Ministerio Público es un órgano independiente tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, con autonomía funcional y autarquía financiera para manejar sus propios recursos, cuya función es promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Finalmente, se estableció un hecho controvertido en nuestra doctrina al expresar que el Ministerio Público está integrado por un procurador general de la Nación y por un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.

La primera pregunta que se hace la doctrina es: ¿estamos ante un órgano único o ante un órgano bicéfalo? Estamos —y lo decimos en forma terminante— ante un órgano extrapoder, independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, pero también —y he aquí la novedad— estamos ante un órgano bicéfalo.

Decía el convencional Cavagna Martínez en la Comisión de Control de la Convención Constituyente —concepto que recogió después el convencional Masnatta, presidente de esa comisión— que veníamos a terminar con la esquizofrenia, que significaba que en un mismo organismo estuvieran los que acusaban y los que defendían, los fiscales y los defensores.

Por eso es que hoy tenemos una institución que es un órgano extrapoder independiente y autárquico, pero bicéfalo, con dos cabezas: el procurador general y el defensor general.

Creo que corresponde aclarar a los diputados a los que hoy nos están escuchando quiénes integran el Ministerio Público, porque mucho

hemos hablado de él pero no hemos dicho quiénes son sus integrantes; y aquí también hay novedades.

Además del procurador general de la Nación, integran el Ministerio Público los fiscales ante la Corte Suprema; los fiscales de la Procuración General; los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; los fiscales generales adjuntos, los fiscales ante los jueces de primera instancia, y los fiscales auxiliares ante los jueces de primera instancia.

Y he aquí la gran novedad que no quería dejar de mencionar: integra el Ministerio Público desde ahora en adelante el fiscal nacional de investigaciones administrativas. Hay una demanda de transparencia en la sociedad argentina; hay que aumentar los controles, y para esto qué mejor que sacar a esta institución desvalida, como es hoy la Fiscalía General de Investigaciones Administrativas, del lugar donde está —nadie la reconoce actualmente— e incluirla dentro de esta ley, dentro de este órgano extrapoder, independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, otorgándole también la capacidad de investigar administrativamente.

Ahora integran además el Ministerio Público los fiscales generales de investigaciones administrativas y los fiscales generales adjuntos, y en segundo lugar —y por esto decimos que es un órgano bicéfalo—, el defensor general de la Nación, los defensores oficiales ante la Corte Suprema, los defensores públicos de menores e incapaces, los tutores y curadores públicos, los defensores públicos oficiales y los defensores públicos adjuntos.

Otra de las grandes preguntas que hoy se hace la doctrina —incógnita que podemos encontrar en cualquier revista jurídica— es cómo se designan los miembros del Ministerio Público.

El Procurador General de la Nación, que hasta este momento venía siendo designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, desde ahora será propuesto por el Poder Ejecutivo y necesitará del acuerdo del Senado por una mayoría agravada: los dos tercios de los miembros presentes.

Los fiscales y los defensores serán designados en tres etapas. En una primera etapa —la más novedosa de todas—, los aspirantes a fiscales y defensores tendrán que presentarse a un concurso público de oposición y antecedentes. En una segunda instancia el procurador general o el defensor general elevan una terna al Poder Ejecutivo, que selecciona a uno de esos representantes y envía la propuesta de nombramiento al Senado. En tercer lugar la Cámara de Sena-

dores con mayoría simple presta acuerdo a los fiscales y a los defensores propuestos.

Tenemos que agregar que de ahora en adelante no habrá más incertidumbre. Los fiscales y los defensores en todas sus instancias gozarán de estabilidad. Así ha quedado consagrado en esta ley.

Ahora bien, ¿cómo se remueven los miembros del Ministerio Público? Vale la pena aclarar que hasta ahora los miembros del Ministerio Público se removían solamente por un decreto del Poder Ejecutivo o simplemente por una resolución ministerial. De ahora en adelante el procurador general y el defensor general estarán sometidos al juicio político que establecen los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, que seguirá el mismo procedimiento que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto de los fiscales y los defensores podrán ser removidos por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por un tribunal de enjuiciamiento que estará integrado por tres ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos abogados con más de veinte años en el ejercicio profesional, y dos fiscales y dos defensores elegidos por sorteo.

Semeramente me voy a referir ahora, porque vale la pena aclararlo, a las principales funciones del Ministerio Público. En primer lugar, y como no podría ser de otra manera, velar por la observancia de la Constitución Nacional; promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad; representar y defender el interés público; promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales; ejercer la defensa de las personas y de los bienes en las causas criminales cuando fueren pobres o estuvieren ausentes; velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, de policía, judiciales y de intervención psiquiátrica, y finalmente, proteger la persona y los bienes de los menores, incapaces e inhabilitados.

Como no quiero abusar de mi tiempo, simplemente desco agregar, teniendo en cuenta que se trata de una institución tan importante, que los legisladores que están por terminar su mandato pueden irse orgullosos porque habrán sancionado una ley que permite la construcción de una institución que es independiente y autárquica de los demás poderes del Estado; una ley de trascendencia histórica.

Para finalizar quiero recordar unas líneas que escribió quien en mi opinión es el mejor biógrafo de la República Argentina. Me refiero al doctor

Octavio Amadeo, quien su libro *Vidas argentinas*, aludiendo a Eduardo Cotas, que reemplazó a Tejedor como procurador general de la Nación después de haber sido ministro de Justicia e Instrucción Pública del presidente Mitre, decía de aquél que tenía cincuenta y cinco años y era, como Marshall, un hombre predestinado que llegó en el momento preciso de su fecunda madurez. Y sigue:

"Ocupó el cargo de mayor autoridad y responsabilidad que existe en el país luego de la Presidencia de la Nación. Fue consejero de Corte, consejero del Poder Ejecutivo, consejero indirecto del Congreso y consejero de toda la administración. Era dueño exclusivo de su pensamiento, su responsabilidad y su estilo.

"Fue el primer procurador que pudo penetrar en las fuentes del derecho público; allí calmó su fuego ardiente de política. La judicatura tranquiliza y eleva a los hombres políticos y sólo una naturaleza rastrera resiste el beneficio de esta decantación."

Señor presidente: estamos a punto de votar uno de los principales proyectos que ha sancionado el Congreso. De esta forma vamos a cumplir con el mandato de nuestros constituyentes y, al mismo tiempo, construiremos un órgano extrapoder independiente del resto de los poderes del Estado que, como señala el Preámbulo de la Constitución, afianzará la Justicia y garantizará la indedependencia del Poder Judicial, hecho que se ha constituido en un anhelo popular. (*Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde proceder a la votación en general del dictamen.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: considero importante dejar aclarado, al momento de registrarse la votación en general del proyecto de ley sobre Ministerio Público, la cantidad de votos por el que fue sancionado en la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia advierte que la votación se realizará en forma mecánica a efectos de saber exactamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución, por cuántos votos será sancionado el proyecto de ley.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Bulacio. — Señor presidente: considero importante que en el presente caso la votación se realice en forma nominal, porque de ese modo se estará determinando la presencia personal.

Pienso que en un proyecto de ley tan importante como éste tiene que quedar registrado quiénes votan y quiénes se han ido a su casa; es decir, que debe quedar constancia de cuáles son los diputados que no asumen la responsabilidad de quedarse en la sesión. Esta es la razón por la que solicito que la votación se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (López Arias). — Cabe aclarar que obra en poder de la Secretaría la nómina de diputados presentes y ausentes.

La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal se halla suficientemente apoyado.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde votar en general nominalmente.

Sr. Bravo (L. A.). — Señor presidente: sugiero que la votación en particular del proyecto también se realice en forma nominal.

Sr. Presidente (López Arias). — Si no hay oposición ni se formula otra propuesta, se procederá en la forma solicitada.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Soria (C. A.). — Señor presidente: quiero aclarar que nosotros hemos trabajado sobre el proyecto sancionado por el Senado y que firmamos el dictamen que figura en el Orden del Día N° 2.251. Luego, en la reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia realizada el miércoles 19 de noviembre, consensuamos las modificaciones al dictamen que habíamos suscrito, las que ayer fueron distribuidas en las bancas junto con los órdenes del día correspondientes.

Hoy votaremos por secciones y por capítulos con las modificaciones que obran en Secretaría, que fueron acordadas y que los diputados conocen. Luego hay pequeñas modificaciones puntuales a algunos de los artículos, que yo voy a leer antes de votar cada capítulo.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar nominalmente en general.

— Se practica la votación nominal.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 160 señores diputados presentes votaron 158 por la afirmativa y ninguno por la negativa. No se ha registrado el voto de un señor diputado por no haber hecho uso de su llave.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Abalovich, Abán, Abasto, Acevedo,

Adaime, Aguirre, Alarcia, Allende, Alterach, Alvarez Echagüe, Alvarez García, Arias, Atanasof, Avila, Balter, Barberis, Barrionuevo, Barrios, Baylac, Becerra, Benzi, Bianculli, Bonino, Bonomi, Bordenave, Bravo (A. P.), Bulacio, Caballero Martín, Cafferata Nores, Cafiero, Cámara, Camaño, Campero, Carbajal, Zieseniss, Carca, Cardoso, Carrara, Castillo (J. L.), Castro, Chica, Cruchaga, D'Elia, Das Neves, Del Fabro, Dellepiane, Díaz Lozano, Díaz Martínez, Digón, Dómina, Domínguez (D. C.), Domsic, Dragicevic, Drisaldi, Dufou, Dumón, Escalante Ortiz, Estrada, Fayad, Fernández de Combes, Flores, Fragoso, Funes, Garay, Garré, Gazia, Gianni, Giménez, Golly, González, González Caviola, Gorini, Guadío, Guevara, Gutiérrez (G. E.), Guzmán, Haquim, Herrera, Illia, Isequilla, Jannarena, Lahoz, Lamberto, Lence, López (J. A.), Macedo, Maqueda, Martínez (E.), Martínez (M. L.), Martínez (S. V.), Martínez Zuccardi, Mathov, Maurette, Melogno, Menem, Mercado Luna, Migliozi, Miralles de Romero, Mondelo, Mondino, Montiel, Mothe, Musa, Natale, Neder, Obarrio, Olima, Pando, Parajón, Parentella, Parra, Pasqualini de Acosta, Peláez, Pepe, Pérez, Pernasetti, Ferrini, Pezoa, Pichetto, Piñón Avila, Polino, Polo, Pruyas, Rampi, Remedi, Rivadera, Roberti, Roldes, Rodil, Roggero, Rollano, Rubini, Saggese, Salim, Salto, Sampietro, Santander, Sarquiz, Scrimizzi, Sobrino, Soria (C. E.), Storani, Stubrin, Suárez, Tagliatino, Tenev, Teodosiu, Togni de Vely, Tolomeo, Toma, Trettel Meyer, Tulio, Vensentini, Veranendi, Viaña, Viglione, Villalba, Viqueira y Vitar.

2

MOCION DE ORDEN

Sr. Camaño. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (López Arias). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Camaño. — Señor presidente: formulo moción de orden de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de proponer el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se acuerda autorización al presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 1998 (expediente 193-S-97).

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado por Buenos Aires. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la moción.

En consideración la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se autoriza al presidente de la Nación a ausentarse del país durante 1998 (expediente 193-S-97).

Se va a votar. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la moción y se incorpora la consideración del asunto en la presente sesión.

3

AUTORIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION PARA AUSENTARSE DEL PAIS

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1997.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor a dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Acuérdase autorización al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 1998, cuando razones de gobierno así lo requieran.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piuzei.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.

Se va a votar el artículo único del proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5054.)

4

REGIMEN ORGANICO DEL MINISTERIO PUBLICO

(Continuación)

Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar en particular el proyecto de ley aprobado en general con las modificaciones que la comisión ha hecho llegar a Secretaría y que obran en poder de los señores diputados.

Por Secretaría se dará lectura del texto de las modificaciones propuestas por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Son las siguientes:

Artículo 4º: El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Defensor general de la Nación;
- b) Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- c) Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, de casación y ante los tribunales orales en lo criminal y sus adjuntos; y defensores públicos oficiales ante la Cámara de Casación Penal, adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, ante los tribunales orales en lo criminal, adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, de primera y segunda instancia del interior del país, ante los tribunales federales de la Capital Federal y los de la Defensoría General de la Nación;
- d) Defensores públicos de menores e incapaces adjuntos de segunda instancia, y defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación;
- e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia y defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones;
- f) Defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

Artículo 5º: El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Artículo 7º: Para ser procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, se requiere

ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional

Para presentarse a concurso para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; fiscal general ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; y los cargos de defensores públicos enunciados en el artículo 4º, incisos b) y c), se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis (6) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para ser fiscal general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3º, inciso c); fiscal ante los jueces de primera instancia, fiscal de la Procuración General de la Nación; fiscal de Investigaciones Administrativas; y los cargos de defensores públicos enunciados en el artículo 4º, incisos d) y e), se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de la Procuración General de la Nación, fiscal auxiliar de primera instancia y defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener dos (2) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación o de las provincias con por lo menos dos (2) años de antigüedad en el título de abogado.

Artículo 12: Se modifica el inciso b):

- b) Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación percibirán un 20 % más, de las remuneraciones que correspondan a los jueces de cámara, computables solamente sobre los ítem sueldo básico, suplemento, remuneración acordada CSJN 71/93, compensación jerárquica y compensación funcional.

Artículo 14: Los magistrados del Ministerio Público gozan de las siguientes inmunidades:

No podrán ser arrestados excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito.

Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público

que corresponda, y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo hacerlo. En su defecto deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

Artículo 51: Se modifica el inciso a):

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa.

Artículo 70: Todos los actuales integrantes del Ministerio Público que se desempeñen en los cargos previstos en los incisos b), c), d), e) y f) de los artículos 3º y 4º de esta ley gozan de la estabilidad que prevé el artículo 120 de la Constitución Nacional. El procurador general y el defensor general deberán obtener el acuerdo previsto en el artículo 5º. A tal efecto el Poder Ejecutivo remitirá los pliegos correspondientes dentro de los treinta días corridos contados a partir de la sanción de la presente ley.

Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá la remoción de dichos funcionarios por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la presente ley.

Artículo 72: Se modifica el inciso f):

- f) Los fiscales y los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3º.

Se modifica el último párrafo del inciso g), quedando redactado de la siguiente manera:

Mientras permanezcan en el cargo, los actuales fiscales adjuntos ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional tendrán la equiparación presupuestaria, remuneratoria y previsional, correspondiente a los cargos previstos

en el inciso e) del artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 12 de la presente ley.

Artículo 73: Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa, modifican su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor general de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a) del artículo 4º;
- b) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso b) del artículo 4º;
- c) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la Cámara de Casación Penal, sus adjuntos, los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales orales en lo criminal, sus adjuntos, ante los tribunales federales de la Capital Federal, los de primera y segunda instancia del interior del país y los secretarios de la Defensoría General de la Nación, en los respectivos cargos de defensores públicos oficiales ante la Cámara de Casación Penal, adjuntos ante la Cámara de Casación Penal, defensores públicos oficiales ante los tribunales orales en lo criminal, adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, ante los tribunales federales de la Capital Federal, de primera y segunda instancia del interior del país y de la Defensoría General de la Nación, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- d) Los asesores de menores e incapaces de cámara y los asesores de menores ante los tribunales orales, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia y ante los tribunales orales en lo criminal, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- e) Los secretarios letrados de la Defensoría General de la Nación, en los cargos de defensores públicos oficiales adjuntos de la Defensoría General de la Nación, conforme lo previsto en el inciso d) del artículo 4º;
- f) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes de primera y de primera y segunda instancia, en los cargos de defensores públicos oficiales ante los jueces y cámaras de apelaciones, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º;
- g) Los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º;
- h) Los prosecretarios letrados de la Defensoría General de la Nación en los cargos de defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación, conforme con lo previsto en el inciso f) del artículo 4º.

Artículo 76: Deróganse las leyes 15.464 y 21.383; los títulos VII, VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58; el artículo 3º, incisos a) y b) y 5º de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.345; el artículo 3º de la ley 23.091 en tanto establece que el defensor oficial ante la Corte Suprema ejerce la competencia ante ella en forma única y exclusiva; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3º de la ley 3.952, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; la ley 3.367 y la ley 17.516 en cuanto se refieren a la representación por los procuradores fiscales y el procurador general de la Nación en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el fisco demande o sea demandado y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en particular el título I, capítulo I, que comprende los artículos 1º a 4º.

La Presidencia aclara que las votaciones del articulado se practicarán por el sistema mecánico a efectos de dejar constancia del resultado de la votación.

Se van a votar los artículos 1º a 3º del dictamen y el artículo 4º con la modificación propuesta por la comisión y obrante en Secretaría.

— Resulta afirmativa de 142 votos; votan 142 señores diputados sobre 150 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo II del título I, que comprende los artículos 5º a 20, con las modificaciones a los artículos 5º, 7º, 12 y 14 obrantes en Secretaría.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: propongo que el punto 4 del inciso c) del artículo 20, que dice: "La sentencia deberá dictarse en un plazo...", quede redactado de la siguiente manera: "La sentencia deberá dictarse en el plazo...". Es decir que reemplazamos el término "un" por la palabra "el".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Caballero Martín. — Señor presidente: el artículo 5º del proyecto dice así: "El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación

del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentarán una terna...". Proponemos que a continuación, luego de una coma, se agregue lo siguiente: "previo concurso". Si bien el artículo siguiente determina que la elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso público, consideramos necesario que el artículo 5º así lo especifique taxativamente a efectos de que su aplicación no pueda prestarse a ningún tipo de confusión en torno de estas designaciones tan importantes.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Garré. — Señor presidente: en razón de que sé, por expresiones del señor diputado Carlos Soria, que no existe el ánimo de aceptar ninguna modificación respecto de los artículos 5º y 6º del proyecto de ley, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de las modificaciones que el bloque del Frepaso pensaba proponer.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por la señora diputada por la Capital.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Se hará la inserción solicitada.¹

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: deseo saber si ha tenido acogida en la comisión la reforma del artículo 14 en lo que se refiere a la inmunidad de arresto. Si ha sido así, solicito que se dé lectura del artículo para saber cómo ha quedado redactado.

Sr. Presidente (López Arias). — Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto para el artículo 14.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — De acuerdo con las modificaciones que obran en esta Secretaría, se ha propuesto suprimir el segundo párrafo del citado artículo.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Está claro, señor diputado?

Sr. Garay. — Si me permite, señor presidente, desearía saber si se han suprimido las palabras "o como consecuencia de un acto por imperio emanado de juez competente".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: el señor diputado Garay solicitó la lectura del artículo y no que le dijeran qué es lo que se había suprimido. Por ello daré lectura de sus dos primeros párrafos, que son los que motivan su preocupación: "Los magistrados del Ministerio Público gozan de las siguientes inmunidades:

"No podrán ser arrestados excepto en caso de ser sorprendidos en flagrante delito." Este texto suplanta al segundo párrafo, al que se refirió el señor diputado Garay.

Sr. Garay. — Señor presidente: estoy contento y satisfecho, pues me alegra que la comisión haya receptado mi propuesta.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: ayer planteé una inquietud al señor diputado Carlos Soria dado que dentro de los requisitos para las designaciones se exige una determinada antigüedad en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Creo conveniente aclarar que puede tratarse del Poder Judicial de la Nación o de las provincias. Ello, porque podría ocurrir que un funcionario de un Poder Judicial provincial quiera ingresar a la carrera judicial dentro del fuero federal, y esta aclaración no surge del articulado de la ley.

Por otra parte, el señor miembro informante ayer receptó esta sugerencia.

Sr. Presidente (López Arias). — Señor diputado: la Presidencia informa que según constancias obrantes en Secretaría ha sido aceptada su propuesta en el artículo 7º.

También había planteado una modificación el señor diputado Caballero Martín.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: el señor diputado Caballero Martín solicitó introducir una modificación en el artículo 5º. En ese sentido destaco que su planteo se halla suficientemente aclarado en el artículo 6º, que hace mención del concurso público. De manera que la comisión no acepta la modificación sugerida en relación con el artículo 5º en virtud de que la cuestión planteada está contemplada y aclarada en el artículo siguiente.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Polo. — Señor presidente: el primer párrafo del artículo 8º determina lo siguiente: "Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento

¹ Véase la inserción solicitada en el Apéndice. (Página 5072.)

de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República."

Estimo que es una redundancia la expresión "bien y legalmente" porque los integrantes del Ministerio Público juran cumplir y hacer cumplir durante su mandato la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Soria (C. E.). — La comisión no acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el capítulo II, que comprende los artículos 5º a 20, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa de 123 votos; votan 123 señores diputados sobre 135 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 21 a 24.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 130 votos; votan 130 señores diputados sobre 139 presentes.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto afirmativo.

Sr. Presidente (López Arias). — Se tomará debida nota, señor diputado.

Sr. Schiaretta. — Señor presidente: del mismo modo solicito que quede constancia de mi voto por la afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Quedará constancia, señor diputado.

Sr. Avila. — Señor presidente: también he votado por la afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Se tomará nota, señor diputado.

Sra. Carré. — Señor presidente: que quede registrado mi voto afirmativo.

Sr. Presidente (López Arias). — Así se hará, señora diputada.

En consideración el título II, sección I, que comprende los artículos 25 a 32.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: propongo introducir una modificación en el segundo párrafo del artículo 31. Allí se dispone: "El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del

defensor general —en su caso—..."; este último incidental debe ser reemplazado por "—según sea el caso—".

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: propongo la siguiente redacción para el artículo 31: "Sin perjuicio de las facultades de superintendencia del procurador general de la Nación, los miembros del Ministerio Público en todas sus instancias ejercerán sus funciones con absoluta y total independencia, no pudiendo los representantes de grado superior impartir a sus inferiores instrucciones relativas al fondo de las cuestiones en que éstos intervengan."

Me permito reiterar y agregar alguna fundamentación a lo que ya he expresado en el debate en general.

La actual redacción del artículo 31 se presta a una pésima interpretación y no preserva la independencia y autonomía del Ministerio Público. En líneas generales se prevé en el Ministerio Público una absoluta independencia y una libertad de conciencia para expresarse. Sin embargo, cuando en el artículo 31 se dice que va a recibir órdenes superiores, si bien se le permite dejar a salvo su objeción de conciencia cuando las instrucciones recibidas sean contrarias a la ley, se lo obliga a acatar la orden del superior. Esto atenta contra todo el mecanismo del esquema que estamos sancionando. Basta que en la cadena jerárquica de subordinación haya un fiscal que sea un servil de alguno de los otros poderes, o un corrupto, para que obligue a los demás fiscales a un determinado comportamiento.

Se me puede contestar que estas instrucciones generales no están referidas al fondo, para lo cual me apresuro a responder diciendo que es necesario que quede perfectamente esclarecida en la ley esta circunstancia de que el fiscal no tiene autoridades superiores en lo que hace a la aplicación de la norma.

Esta es una reminiscencia que no se pueden borrar algunos funcionarios públicos y algunos legisladores que han nacido y se han criado en este sistema de dependencia lamentable que hemos venido viviendo hasta ahora.

Al respecto quiero recordar que hace muy poco tiempo hemos tenido cuestiones vinculadas con esta subordinación. Ahora será mucho más grave porque entonces la subordinación se originaba en el Poder Ejecutivo y ahora podrá partir de un funcionario superior del Ministerio Público. De cualquier modo se obliga a una actitud de servilismo —si se quiere— al fun-

cionario inferior, quien más allá de lo que su propia idoneidad profesional como abogado le indica como criterio de justicia, tiene que hacer lo contrario porque está obligado a cumplir lo que la legislación establece.

Adviértase que en la redacción del artículo 31 se habla de la posibilidad de una orden contraria a la ley, que si hubiere sido en el orden de lo jurisdiccional estaría constituyendo un prevaricato, que precisamente consiste en la aplicación de una ley que se sabe contraria a lo que se requiere ante una determinada situación para hacer justicia.

Propongo que entre todos reveamos este proyecto y que lo salvemos de esta especie de telaraña que vienen trayendo los viejos funcionarios y que consiste en recibir órdenes superiores o dar órdenes si se está por encima de los fiscales.

Llamo la atención sobre este proyecto porque —insisto—, rompe el esquema de independencia del Ministerio Público.

¿Para qué estamos hablando de que éste es un órgano extrapoder si dentro del poder estamos estableciendo una suerte de tiranía jerárquica similar a lo que puede acontecer en otros órdenes, como el militar, donde la obediencia es sustancial para el cumplimiento de la función? Aquí la autonomía y la independencia representan nada menos que la garantía del justiciable.

Por ello es que propongo a mis pares y pido al señor miembro informante y a los integrantes de las comisiones que estudiamos este proyecto, que se lleve a cabo una necesaria revisión.

¿Qué necesidad tenemos de que un fiscal reciba instrucciones superiores? Muchas veces se dijo que el Estado tenía derecho a establecer la política criminal a través de esas órdenes. No es cierto; ha sido una falacia, un lugar común declamado permanentemente por quienes no quieren profundizar en el derecho.

¿Qué política criminal puede establecer un funcionario superior? La política criminal la establece el Poder Legislativo a través de una ley, y no un funcionario que arbitrariamente pueda impartir en su momento a los fiscales —como se hizo en la Argentina— la orden estricta de no apelar ni interponer recurso alguno contra los indultos, aun cuando alguno de los indultos que se dictaron recientemente fueron absolutamente en contra de lo que las leyes disponen y de lo que la Constitución establece.

Reveamos este proyecto, señores diputados. Esta es una norma de suma trascendencia y no tiene mayor importancia que el órgano sea

monocéfalo o bicéfalo cuando los que están arriba no tienen el derecho de imponer a los subordinados nada menos que el criterio de justicia o la convicción que su calidad de abogado le da para aplicar la ley en un determinado momento.

Reveamos —insisto— esta redacción y quitémosle la subordinación jerárquica que se le otorga al Ministerio Público.

Sr. Presidente (López Arias). — Ruego a los señores diputados que traten de ser lo más sintéticos posible en sus exposiciones porque, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos sin quórum.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cafferatta Nores. — Señor presidente: sin duda las dificultades de sonido prueban que este micrófono está programado para amplificar la voz de los titulares naturales de este bloque, y no a la circunstancial de simples diputados como el caso de quien habla (*Risas.*) Agradezco a los técnicos de electrónica el esfuerzo que han hecho para adaptarlo a mi voz.

Quiero responder la importante observación formulada por el señor diputado preopinante. En tal sentido apunto que hemos trabajado con la idea de sancionar este proyecto de ley sobre la base de acuedos, lo que ciertamente en este punto no fue fácil; pero finalmente arribamos a ellos por encima de las diversas opiniones particulares de los integrantes de las diferentes bancadas.

Según mi criterio, las observaciones del señor diputado Garay serán de utilidad para que quienes en el futuro deban aplicar esta norma sepan que el espíritu de este cuerpo al aprobar esta iniciativa es que las instrucciones que habrá de impartir el procurador general de la Nación se deberán ajustar al sistema legal, es decir, deberán ser ajustadas a derecho.

Por eso, en este artículo se ha previsto la posibilidad de que el funcionario inferior que entienda que la instrucción que recibe es contraria a la ley, no la cumpla y presente una objeción fundada. Al respecto propongo que quede como interpretación del artículo que frente a tal objeción el funcionario superior que dio la orden objetada deba insistir con ella, del modo en que originariamente la impartió, si sigue creyendo en su legalidad. De esa manera la responsabilidad por la ejecución se podrá trasladar al funcionario superior, y si en verdad este funcionario hubiese incurrido al impartir la orden en alguna infracción legal, se podrá recurrir a los procedimientos constitu-

cionales y legales pertinentes para hacerle efectiva la responsabilidad en que pudiera haber incurrido. Además, el fiscal inferior podrá negarse a cumplir la orden que considere ilegal, negativa que será posible de idéntico examen de responsabilidad para el caso de que sea infundada.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: en mi opinión el principio de autonomía funcional que tan vehementemente reclama el señor diputado Garay es compartido por todos los que participamos de los debates vinculados con este instituto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. En verdad este principio se aplica con validez universal dentro del sistema romano coordinado con aquel otro de validez plena que es el de la unidad funcional. Como sostienen los franceses, el Ministerio Público o el ministerio fiscal es uno e indivisible. En consecuencia, entendemos que el texto en consideración responde a los principios que acabamos de citar.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: sin ánimo de coartar el debate ni el uso de la palabra adelanto que en razón de que la comisión tiene un texto acordado entre los diversos bloques no habrá de aceptar otras modificaciones que las que oportunamente enunciaré.

Nuestro objetivo es sancionar este proyecto de ley en la presente reunión, de modo que sugerimos que se solicite la inserción en el Diario de Sesiones de las emiendas que los señores diputados deseen formular aunque la comisión no habrá de aceptarlas.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el título II, sección primera, que comprende los artículos 25 a 32.

— Resulta afirmativa de 125 votos; votan 133 señores diputados sobre 140 presentes.

Sr. Baylac. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Baylac. — Quiero informar a la Presidencia que la luz que en mi banca indica el voto afirmativo no se ha encendido al momento de emitirlo.

Sr. Presidente (López Arias). — Quedará constancia de esa situación.

En consideración el título II, sección II, que tiene dos capítulos. En primer lugar se va a considerar el capítulo I, que comprende los artículos 33 a 42.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: deseo proponer una modificación al último párrafo del punto 5 del inciso a) del artículo 33. En los tres últimos renglones se dice: "...o el recurso o la queja fuesen manifiestamente infundados, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general." La modificación que propongo es que allí se diga "manifiestamente inadmisibles".

El señor diputado Arias va a proponer una modificación al inciso f), y el señor diputado Cafiero propiciará luego la incorporación del inciso v).

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: propongo una modificación al inciso f). Procuramos su armonización con lo prescripto en el artículo 1º en cuanto establece la independencia plena, esa autonomía funcional a que hacíamos referencia hace unos instantes, que debe ser fortificada en el desarrollo del texto. También procuramos la armonización con el artículo 23.

Por lo tanto proponemos que el inciso f) quede redactado de la siguiente forma: "Elevar al Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias."

¿Por qué proponemos esta modificación? Porque la propia ley está estableciendo que respecto de las actividades propias de este poder el órgano de comunicación es la comisión bicameral.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cafiero. — Señor presidente: tal como sucede en el Código Procesal Penal nacional, se ha receptado la posibilidad de que la actividad de instrucción preliminar en los delitos de acción pública sea delegada por el juez en el Ministerio Público.

Estamos introduciendo lo que consideramos las atribuciones con las que se va a manejar el procurador general de la Nación. Por lo tanto la sugerencia es incorporar un inciso para que así como el resto del Ministerio Público va a

poder llevar adelante esas actividades investigativas, también las pueda realizar el procurador en los casos en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba causas con motivo de su competencia originaria.

Por ejemplo, para ilustrar debidamente el tema puedo citar la causa que sigue la Corte Suprema de Justicia sobre el atentado contra la embajada de Israel. Todos recordamos las dificultades que existieron, de tipo político y de interpretación jurídica, sobre la posibilidad de delegación y las manifestaciones que hubo respecto a la necesidad de que ésta se viabilizara.

Para este tipo de casos proponemos como inciso v) el siguiente: "Ejercer por delegación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las causas de competencia originaria de ésta, las funciones de instrucción en los términos del artículo 196, primera parte, del Código Procesal Penal de la Nación".

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Soria (C. E.). — Sí, señor presidente.

Sr. Cafferata Nores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). — Antes de que la comisión se expida, tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cafferata Nores. — Señor presidente: respecto de este capítulo voy a efectuar algunas breves consideraciones relacionadas con el Ministerio Público Fiscal en su función penal.

En primer lugar, a partir de esta ley vamos a tener el Ministerio Público independiente que tanto anhelamos. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿ahora qué? Con un Ministerio Público independiente, ¿vamos a seguir en el futuro acordándole las mismas modestas responsabilidades que hoy día en día le otorga el Código de Procedimientos en lo Penal? Creo que es importante dejar planteado que la sanción de esta norma va a significar, si se me permite una figura, un cambio de actores dentro de un escenario. Hoy en día, cuando en el escenario de las investigaciones penales de nuestro país se levanta el telón, la figura principal es el juez de instrucción, y el fiscal es un modesto *partenaire* que, con mayores o menores atribuciones que le otorga el juez, cumple la función que le encarga la ley.

A partir de la sanción de esta ley se debe provocar un urgente proceso de reflexión y cambio en los procedimientos penales para que, cuando en el futuro próximo, se levante el telón en este escenario de la investigación penal, irrumpa vigorosamente ya no como un *partenaire* sino como figura principal el Ministerio

Público Fiscal, a cargo de la persecución penal, es decir, a cargo de la investigación de los delitos y de la fundamentación y sostenimiento de las acusaciones ante los tribunales de Justicia. Con esto vamos a lograr, además de una mayor eficacia en la acusación, una mayor garantía para los ciudadanos, pues los jueces van a tener que ceñir su tarea a controlar el resguardo de las garantías y a resolver imparcialmente las acusaciones que se presenten, que es su función específica. Juzgar, no investigar, es la tarea de los tribunales.

La segunda opinión que quiero vertir es que considero que debe quedar en claro qué significan para la Cámara de Diputados términos como "interés general", "causa pública" e "interés público", cuya tutela pone a cargo del Ministerio Público Fiscal. Lo que debemos preguntarnos ahora es: ¿qué es el interés general? ¿Qué es el interés público? ¿El interés público es algo que por ser de todos los ciudadanos deja de ser de cada uno, o es aquello que por ser de cada uno se convierte en interés de todos? Esta pregunta no es casual, pues su respuesta está ligada a las concepciones sobre el fundamento del poder penal y sobre el ejercicio de la persecución penal.

Si creemos que el interés de cada uno deja de ser tal y se transforma solamente en un interés de todos, ese interés, en su mutación, es apropiado por el Estado, dando lugar a la ficción del Estado víctima y a la concepción de que el Ministerio Fiscal representa al interés del Estado. Si, por el contrario, aceptamos que el interés que defiende el Ministerio Público es de todos, sólo porque es el de cada uno, éste se perfila como un agente público al servicio de la comunidad, que en el proceso penal va a estar al lado de la víctima que se constituye en querellante, ayudándola. Y cuando ésta no quiera o no pueda constituirse en querellante, asumirá el Ministerio Público una función de representante, de abogado de la víctima de carne y hueso, considerándolo en su perjuicio directo o indirecto, tal como ocurrirá en los delitos ambientales o contra la regular actividad económica del Estado, etcétera.

Es imprescindible, por último, dejar aclarado que el Ministerio Público Fiscal no sólo se tiene que relacionar con otros organismos públicos del Estado sino también con la sociedad civil. Por lo tanto, en la futura reglamentación habrá que establecer formas de enlazar al Ministerio Público con las organizaciones que se ocupan de las víctimas del delito, ya sea en forma individual o defendiendo intereses colectivos o difusos. Sólo de esta manera el órgano que estamos creando —considerado como defensor del interés indivi-

dual o difuso de los derechos de la gente— permitirá un avance institucional que responderá al propósito perseguido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, que no autoriza una actividad monopólica del Ministerio Público Fiscal. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: la comisión entiende que lo referido por el señor diputado preopinante es lo que el dictamen ha tenido en cuenta y, por lo tanto, no persigue ninguna modificación al artículo en consideración.

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar la sección II, "Ministerio Público Fiscal", capítulo I, que comprende del artículo 33 al 42 inclusive, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa de 124 votos; votan 124 señores diputados sobre 135 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el capítulo II, "Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Organización", que comprende del artículo 43 al 50 inclusive.

La Presidencia aclara que en relación con el presente capítulo no obran modificaciones en poder de la Secretaría.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 126 votos; votan 127 señores diputados sobre 135 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración la sección III, "Ministerio Público de la Defensa, defensor general de la Nación", que comprende del artículo 51 al 64 inclusive.

La Presidencia aclara que obran en poder de la Secretaría modificaciones al artículo 51.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: el señor diputado Arias hará explícita la modificación que proponemos al inciso k) del artículo 51.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: proponemos que en el inciso k) del artículo 51 se establezca el mismo texto del inciso j) del artículo 33, que trata de las facultades, deberes y atribuciones del procurador general de la Nación, aunque en este caso las trasladamos al defensor general de la Nación.

Reitero que para el inciso k) del artículo 51 proponemos el mismo texto contenido en el inciso j) del artículo 33, que dice así: "Eleva al

Poder Legislativo, por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de reformas reglamentarias."

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Soria (C. E.). — Señor presidente: proponemos que en el inciso q) del artículo 51 se supriman dos palabras. El mencionado inciso dice lo siguiente: "Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4º, incisos b) y c) de la presente ley en la cual se considerarán...". Es decir, antes decía "en las cuales" y ahora dice "en la cual"; ésta es la única modificación.

En cuanto al artículo 52, proponemos otra pequeña modificación. Este artículo decía: "La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del defensor general de la Nación, como jefe del Ministerio Público de la Defensa. En dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el defensor general de la Nación, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación..."; el resto queda tal cual está redactado.

Con respecto al artículo 60 proponemos una modificación en el inciso e), que decía: "Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas...". Ahora diría: "oponiendo las defensas".

Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar el título II, sección III, que comprende los artículos 51 a 64, con las modificaciones que acaba de proponer la comisión y con la contenida en el texto que obra en Secretaría.

— Resulta afirmativa de 115 votos; votan 116 señores diputados sobre 134 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el título II, sección IV, que comprende el artículo 65.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 136 votos; votan 137 señores diputados sobre 141 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el título III, que comprende los artículos 66 a 77.

Obran en poder de la Secretaría modificaciones a los artículos 70, 72, 73 y 76.

Se va a votar con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa de 131 votos; votan 132 señores diputados sobre 140 presentes.

Sr. Presidente (López Arias). — El artículo 77 es de forma.

Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.

Se comunicará al Honorable Senado.¹ (*Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al señor diputado Carlos Ernesto Soria.*)

Se va a votar una inserción solicitada por el señor diputado Cafferata Nores.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). — Queda autorizada la inserción solicitada.²

5

MOCION DE ORDEN

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de tratar sobre tablas el proyecto de ley contenido en el expediente 260-D.-97, sobre régimen para el fomento de la lucha antigranizo, que cuenta con dictamen unánime de todas las comisiones a las que fue girado. Dado el extenso tratamiento que tuvo en ellas, es posible que sea aprobado por la Cámara en forma rápida.

Sr. Presidente (López Arias). — A fin de aunar criterios, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (López Arias). — Continúa la sesión.

La Presidencia necesita conocer si la señora diputada Zuccardi estaría dispuesta a levantar su moción de apartamiento del reglamento.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 5054.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 5073.)

Sra. Zuccardi. — Estaría dispuesta a postergar el pedido hasta tanto se consiga quórum, con el compromiso de que sea lo primero en votarse.

Sr. Flores. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Flores. — Señor presidente: los distintos bloques hemos acordado comenzar ahora con el informe final de IBM. En ese marco, el acuerdo se relaciona también con una cantidad de proyectos para ser incorporados al orden del día.

Lo que sugiero a la señora diputada Zuccardi es que incluya el tratamiento de su tema dentro de los proyectos que se van a tratar el martes.

Sr. Presidente (López Arias). — ¿Acepta, señora diputada?

Sra. Zuccardi. — Acepto, señor presidente.

6

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA CONTRATACIONES ESTADO ARGENTINO - IBM (Orden del Día Nº 2.230)

Honorable Senado:

La Comisión Especial Investigadora de los Contratos de IBM con el Estado Argentino, en cumplimiento de su cometido, ha producido los siguientes dictámenes:

I

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

1º — Que las contrataciones de servicios informáticos entre IBM, en el caso del Banco de la Nación Argentina, a través de la licitación pública 60/93 y en el caso de la Dirección General Impositiva, a través del decreto 507/93 y sus prórrogas (decretos 2.780/93; 1.897/94 y 1.001/95) investigadas por esta comisión, contienen serias irregularidades e ilícitos que originaron al patrimonio público nacional graves perjuicios.

2º — Que de las investigaciones efectuadas, resultan las conclusiones que se establecen en el informe final de la comisión.

3º — Que de las investigaciones efectuadas, resultan las responsabilidades explicitadas en el informe final de la Comisión Investigadora de los Contratos de IBM Argentina con la administración pública y que a continuación se transcriben por tratarse de los funcionarios de mayor jerarquía:

Doctor Aldo Dadone

a) Realizar en forma irregular numerosos actos decisivos que demuestran digitación de los pliegos lici-